



MEMORIA ECONÓMICA RELATIVA A LA PROPUESTA DE PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 12 DE MAYO DE 2017, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LAS AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA, establece como fines de esta entidad el desarrollo económico equilibrado del Principado de Asturias, así como la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como marco idóneo generador del incremento y la consolidación del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Se considera, por tanto, necesario el establecimiento de un régimen de subvenciones económicas dirigidas a fomentar la creación de nuevas empresas como componente estructurador del tejido productivo, promover actuaciones que permitan su diversificación, impulsar aquellos sectores industriales no tradicionales y especialmente los nuevos, intensivos en conocimiento y generadores de mayor valor añadido y empleo cualificado, propiciando simultáneamente la convergencia con las regiones desarrolladas y dinámicas de la Unión Europea.

La mejora de la gestión y el control de los programas de apoyo a las empresas, la eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público persiguiendo la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, son obligaciones impuestas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En atención a dichas obligaciones, desde el IDEPA, con el objetivo de impulsar la creación y desarrollo de las empresas y el apoyo a la creación de empleo, incidiendo en la revitalización de nuestro tejido industrial, se propusieron las bases que fueron aprobadas por Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para las ayudas a Proyectos de Inversión Empresarial en el ámbito del Principado de Asturias.

Se propone la modificación de las mismas, en la Base Reguladora Quinta apartado 6.1 con el fin de poder modificar el umbral de inversión mínima, hasta entonces establecido en un importe *igual o superior a 500.000 €*.

La modificación consiste en determinar que será la convocatoria la que fije la cuantía mínima subvencionable.

Se justifica la misma en el propio carácter de las bases reguladoras, al ser una disposición de carácter general, con un sentido de permanencia en el tiempo, siendo más oportuno que sea la convocatoria anual la que lo determine, resultando más en consonancia con el contexto económico del momento.

De esta forma en las sucesivas convocatorias anuales se podrá determinar el importe mínimo de inversión que en el año 2020 será de 250.000 €.

Directamente relacionado con el requisito anterior, es la causa de revocación fijada en la base reguladora Decimoctava, que deberá adaptarse a la nueva redacción de la que trae causa; actualmente establece que es causa de revocación total, *b) una inversión subvencionable finalmente justificada inferior a 500.000 €*; que ahora pasará a ser igualmente determinada en la convocatoria en función de la inversión mínima exigida como requisito para ser beneficiario.

Al mismo tiempo se aprovecha para actualizar las bases reguladoras eliminando la necesidad de aportar en la cuenta justificativa un documento que en la actualidad se obtiene a través de consulta realizada por el IDEPA a través de las plataformas de intermediación de datos y otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, si no hay oposición expresa.



A tenor de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se establecen los principios de buena regulación, se señala lo siguiente:

Respecto de los principios de necesidad y eficacia: La modificación de las bases que nos ocupan posibilitará el acceso a esta línea de ayudas de proyectos de inversión de empresas pequeñas y medianas que no tendrían otra posibilidad de obtener ayudas a su proyecto de inversión.

Respecto del principio de proporcionalidad: Se trata de una adaptación imprescindible para posibilitar la ejecución de las medidas de fomento a las que se refieren.

Respecto del principio de seguridad jurídica: La modificación de las bases se promueve de modo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, al acomodarse así a lo dispuesto en la Ley 38/2003 conformando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita la actuación y toma de decisión de los potenciales beneficiarios solicitantes de la misma.

Respecto del principio de transparencia: en relación al artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, puesto en conexión con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procedió a dar publicidad de la presente modificación de bases, para garantizar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de la misma.

Respecto del principio de eficiencia: Esta modificación de bases evita cargas administrativas innecesarias al beneficiario de tener que presentar la Vida Laboral de la empresa, siempre y cuando no se oponga expresamente a su obtención a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Es por ello, que se propone modificar los apartados siguientes de las bases reguladoras:

- La base reguladora Quinta apartado 6.1, queda redactada de la siguiente manera:

"1. El proyecto de inversión deberá comprender una cuantía subvencionable que se fijará en cada convocatoria"
- La base reguladora Decimoctava, apartado 2. b), queda redactada de la siguiente manera:

"b) Una inversión subvencionable finalmente justificada inferior a la fijada en cada convocatoria"
- Se suprime el apartado 5.d) de la base reguladora Decimosexta.- Otra documentación:

"Vida Laboral de la Empresa del último día del plazo máximo concedido para la ejecución del proyecto en la Resolución de concesión, o bien, el del día de presentación de la cuenta justificativa si no se agotase el primero".

Esta modificación de las bases reguladoras, no supone un incremento del gasto, en tanto que las subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva. La subvención que se concede se calcula sobre la inversión considerada subvencionable, que con la modificación permite que proyectos por menor importe que el actual puedan ser objeto de subvención.

No se aprecia efecto económico de ninguna clase, ya que la partida presupuestaria destinada a las subvenciones que se otorguen a través de la convocatoria que se apruebe en el ejercicio 2020, con amparo en las bases reguladoras, no sufre ninguna alteración como consecuencia de la modificación que se propone.

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), se aplica a cualquier actuación administrativa, disposición o medio de intervención de cualquier autoridad competente que incida, directa o indirectamente en el acceso y el ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de mercado por parte de los operadores económicos legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.

Con carácter general, dado que el artículo 9 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado señala que "las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observación de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de su actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia" y por otro lado, en el artículo 8 de la misma norma hace alusión al principio de transparencia, donde se recoge que todas las autoridades competentes actuarán con transparencia para la correcta aplicación de la LGUM. Así como, en el apartado 2 del artículo 14 de la LGUM, que versa sobre los procedimientos de elaboración de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado, señala que, la autoridad competente proponente de la norma pondrá a disposición del resto de autoridades el texto del proyecto, acompañado de los informes o documentos que permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto normativo.

Una vez analizada la propuesta de resolución, no se aprecia que ninguna de las modificaciones propuestas sobre la resolución aprobatoria de las bases reguladoras de los Proyectos de Inversión Empresarial suponga ningún tipo de límite o restricción al acceso a una actividad económica o a su ejercicio, puesto que el proyecto normativo amplía los proyectos susceptibles de recibir una subvención.

-Financiación económica

La financiación del programa de subvenciones a Proyectos de Inversión Empresarial en el ámbito del Principado de Asturias, se realiza a través del Presupuesto del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

La financiación procede del propio presupuesto del IDEPA y de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La dotación asignada a la convocatoria de Proyectos de Inversión Empresarial recogida en la Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica para 2020-2022. (BOPA Nº 37, 24/02/2020) para el ejercicio 2020 es por importe de 3.000.000 €, con la siguiente distribución plurianual:

- 2020: 1.500.000 €
- 2021: 1.500.000 €

Llanera, a 11 de marzo de 2020
Directora General del IDEPA

Eva Pando Iglesias



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional